



**JUZGADO DÉCIMO (10°) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., dos (02) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	11001333501020210013000
Clase Proceso	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Demandante	LUIS ARNULFO DELGADO ZARATE
Demandado	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS-INCI-
Asunto	RESUELVE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL

Acorde con lo previsto por el inciso cuarto del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, procede el Despacho a decidir la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante¹.

I. ANTECEDENTES

1. El apoderado de la parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, interpuso demanda contra la entidad accionada de la referencia, tendiente a obtener la nulidad de los actos administrativos que dispusieron imponer sanción disciplinaria al accionante, en calidad de servidor público del ente accionado, así como la conversión a salarios de la suspensión en ejercicio del cargo, impuesta como sanción disciplinaria.

En consecuencia, que se devuelva al demandante las sumas de dinero que haya pagado por concepto de la multa que le fue impuesta así como el pago de perjuicios morales.

2. Argumenta la demanda, en síntesis, que los actos administrativos demandados no se ajustaron a la legalidad, que se le impuso sanción disciplinaria al actor por una conducta que es atípica desde el punto de vista disciplinario y que se incurrió en un numero plural de causales de nulidad, que desvirtúan la presunción de legalidad de los actos acusados.

3. De otro lado, la solicitud de suspensión provisional de los actos acusados, se sustentó en que, dentro acto administrativo del 22 de diciembre de 2020 Código SG-110-FM-144, por medio del cual se sancionó con suspensión en el ejercicio de funciones al demandante, resulta evidente que las normas del estatuto disciplinario resultan violadas porque se emitió sanción por una conducta atípica.

4. Sostiene que el actor fue sancionado por supuesta extralimitación de las funciones propias de su cargo, por haber enviado a la Procuraduría General de la Nación los correos electrónicos de 27 de noviembre de 2017 y 29 de noviembre de

¹ Dentro del mismo escrito de la demanda

2017, con el propósito de que se investigara al señor DARIO JAVIER MONTAÑEZ VARGAS, quien desempeñaba el cargo de Secretario General del INCI, y ANDREA CAROLINA CUADROS, quien se desempeñaba como coordinadora de Recursos Humanos de la misma entidad, por haber alterado el procedimiento y cronograma adoptado para liquidar la nómina, dado que tal orden impedía que se incluyeran en la liquidación todas las novedades de nómina y, en consecuencia, el resultado final no sería acertado, a tal punto que se requeriría hacer una liquidación adicional, para corregir los errores; denuncia efectuada en cumplimiento de los deberes de que tratan los numerales 24 y 25 del artículo 34, el numeral 1 del artículo 35 y el artículo 70 de la Ley 734 de 2002.

5. Denuncia que conocida, por el Secretario General de la entidad quien inició en contra del actor, una indagación preliminar de carácter disciplinario que, posteriormente, fue utilizada como soporte para la apertura de la Investigación Disciplinaria 049 de 2017, lo que vulnera el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, ya que denunciar la existencia de un comportamiento irregular de un funcionario no encaja dentro de ninguna de las conductas constitutivas de falta disciplinaria que consagra éste artículo. La investigación 049 de 2017 culminó con la imposición de sanción disciplinaria, lo cual también viola el artículo 29 de la Constitución Política, toda vez que se vulneró el debido proceso al investigar y sancionar al demandante por una conducta atípica.

6. Sostiene que la solicitud en estudio cumple los requisitos del artículo 231 del CPACA, habida cuenta que **I)** está razonablemente fundada en derecho, porque existe suficiente fundamento legal para la demanda tenga vocación de prosperidad, **II)** La titularidad del derecho está demostrada, **III)** la situación sería más gravosa para la entidad pública, porque de su presupuesto se vería obligada a responder por los perjuicios causados al demandante, afectando el interés público como quiera que el presupuesto de la entidad se nutre de las transferencias que le hace nación. **IV)** de no decretarse la medida se causa un perjuicio irremediable al demandante, como quiera que en su contra se ha iniciado un proceso de cobro coactivo.

II. EL TRÁMITE SURTIDO

7. La solicitud de suspensión provisional fue allegada por la parte actora al juzgado, mediante correo de 25 de mayo de 2022 dirigido a la dirección electrónica de correspondencia de la sede judicial, con copia al correo de la accionada juridica@inci.gov.co

8. **La entidad accionada** ejerció su derecho a la defensa y contradicción, oponiéndose a la solicitud de suspensión provisional, argumentando que no se cumplen los requisitos para acceder a dicha medida, por lo cual solicita que se deniegue.

9. En síntesis, indicó que el acto administrativo fue expedido con los requisitos legales, y que actualmente no cursa un proceso de cobro persuasivo en contra del demandante en el INCI. Y que no debe tenerse en cuenta el documento aportado con la suspensión provisional, relativa al inicio un proceso de cobro coactivo en contra del demandante, teniendo en cuenta que lo aportado no hace referencia a actos administrativos, sino a la actuación de notificación, la cual no se ha surtido y no hace relación a ningún inicio de cobro coactivo o persuasivo.

10. Señaló además que el presunto acto administrativo que genera la medida cautelar de suspensión, no es un acto administrativo de cobro coactivo, y que se está solicitando la suspensión de los fallos del proceso disciplinario que están

siendo revisados por el juzgado, faltando así uno de los requisitos fundamentales para que la medida pueda otorgarse y es la falta de explicación de la necesidad de la medida, porque generara un daño irremediable, el cual para este caso no existe, ya que no concurre cobro persuasivo o coactivo alguno en contra del demandante.

IV. PARA RESOLVER SE CONSIDERA

11. Para efectos de resolver la solicitud de medida cautelar elevada por la entidad demandante, sea lo primero recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, el Juez o Magistrado Ponente, a petición de parte podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

12. Por su parte, el artículo 230 de la misma ley establece que las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deben tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo tanto, se podrán decretar cualquiera de las medidas allí señaladas, entre las cuales, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo.

13. Además, el artículo 231 ibídem establece que cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y, cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento de un derecho y la indemnización de perjuicios, se deberá probar al menos sumariamente la existencia de los mismos.

14. Descendiendo al caso concreto se observa que la parte demandante pretende la nulidad de los actos administrativos enunciados en la demanda, en los que se observa, se impuso sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo, se confirmó la sanción y por último, se convirtió a salarios la suspensión en el ejercicio del cargo.

15. Observando lo anterior, y analizada por otra parte, la argumentación presentada por la parte demandante para proceder al decreto la suspensión provisional, el Despacho la considera insuficiente para disponer de tal medida en este estadio procesal, como quiera que el Juzgado no evidencia que con la expedición de las resoluciones acusadas se hayan violado de manera visible y notoria, las normas que se invocan como violadas en el escrito de la demanda; lo anterior, sin perjuicio de que al analizar de fondo el acervo probatorio y las alegaciones de las partes en la sentencia, pueda llegar a determinarse que los actos administrativos acusados se encuentran incursos en alguna causal de nulidad que desvirtúe su presunción de legalidad.

16. Al no observarse de manera palmaria hasta el momento, vulneración de las normas invocadas en la demanda, considera esta Agencia Judicial que se necesario evaluar a fondo la legalidad de los actos acusados, a través del trámite del proceso y la resolución final del fondo del asunto en la sentencia, con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logren recaudar.

17. Ahora bien, para que sean procedentes las medidas cautelares, debe concurrir un número plural de requisitos de que trata el artículo 231 del CPACA, encontrando que para el caso presente tampoco se cumplirían en su totalidad, en tanto no se

observa, pese a las consideraciones de la parte actora, la existencia de un perjuicio irremediable en caso de no otorgarse la medida (numeral 4, literal a, artículo 231).

18. Lo anterior, en la medida en que si bien anuncia la solicitud que contra el demandante se inició un proceso de cobro coactivo con ocasión de la conversión de la sanción a salarios, ello por sí solo no implica la configuración de un perjuicio irremediable, habida cuenta que en el evento de resultar la sentencia a favor de los intereses jurídicos del demandante, el restablecimiento del derecho implicaría precisamente, la devolución de las sumas que tuvo que pagar con ocasión de la sanción disciplinaria, en consecuencia el perjuicio no es irremediable.

19. Por consiguiente, el Despacho no accederá al decreto de la medida cautelar por cuanto se encuentra necesario evaluar el caso concreto, con fundamento en jurisprudencia, normas y las pruebas que legal y oportunamente se logre recaudar, valorándolas en la etapa procesal correspondiente.

En razón a lo anterior, este despacho

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados, presentada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme la presente decisión, ingrese de nuevo el expediente al Despacho, para continuar con el trámite procesal que corresponda.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

A.O.-

4

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 52bcd00894154e2760b6201135f18a01a618ed808b1212bab2ef96efc9e013f0

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>